

Estado y educación en Chile

por Dante Castillo* y Mario Torres**

Situados en el contexto nacional, el diseño educativo que continúa promoviendo el Estado es el que se consolidó durante los primeros años de la Reforma de la década de los noventa. El arribo de las transiciones democráticas en la región latinoamericana implicó el declive de la pedagogía de la liberación y el esfuerzo planificado por separar la dimensión social de la educación, reduciéndola a la sala de clases y a los intramuros de los establecimientos educativos.

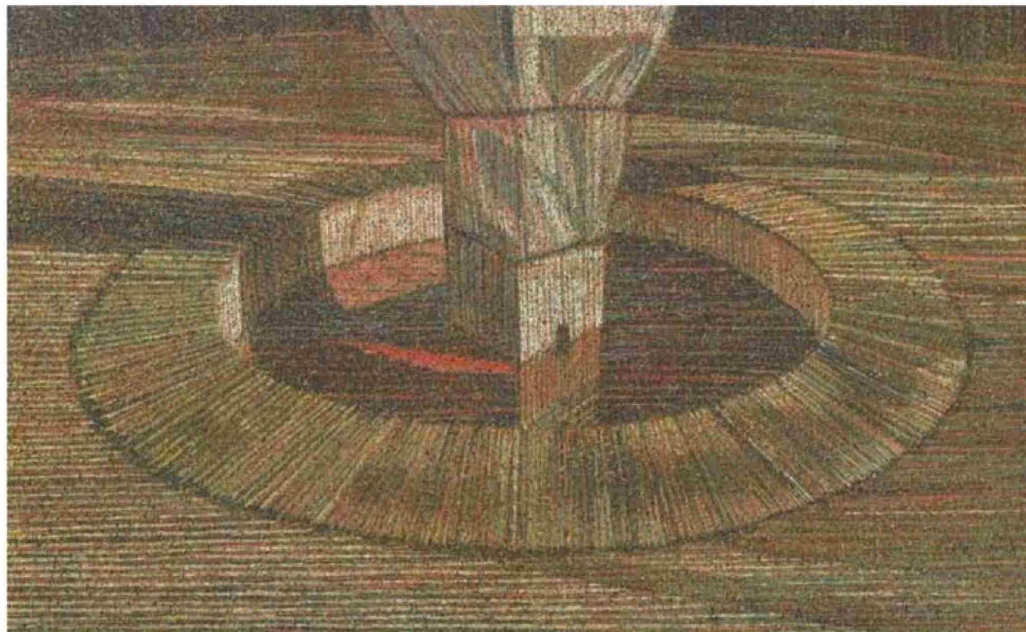
De la mano de las declaraciones de las instituciones internacionales, UNESCO, OCDE, OIT, FMI y Banco Mundial, los y las diseñadoras de políticas educativas legitimaron la creencia que antes de relacionar a la educación con el rol social del Estado, lo primero era fortalecer la escolarización del estudiantado. Bajo esta premisa, la educación le dio la espalda a la calle y se centró en el trabajo del aula. De esta forma, el Estado solamente se vinculaba a la educación a través de sus entidades sectoriales técnicas. En este movimiento el Estado, a través del Ministerio de Educación se convirtió en un garante de la normativa y de los programas que, con la ayuda de actores subsidiados, se concentraron en la gestión escolar.

Coincidiendo con el término de la guerra fría y con las transformaciones políticas en América Latina, las Naciones Unidas encomiendan a la UNESCO la realización de una Conferencia Mundial en que los Estados se comprometieran en una agenda de trabajo. En este escenario, prácticamente la totalidad de Estados de la ONU, se reúnen en Jomtien, Tailandia, entre el 5 al 9 de marzo de 1990, para suscribir la "Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje".

Apoyados por compromisos de préstamos y de aportes financieros directos los representantes de los Estados participantes en la Conferencia, incluyendo Chile, también se comprometen a focalizar sus acciones en determinar niveles aceptables de adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje en los planes de educación y aplicar sistemas mejorados de evaluación de los resultados de la educación.

Bajo este imperativo, el Estado chileno se concentra en desarrollar políticas de apoyo para poder impartir y aprovechar de manera cabal la educación con vistas al mejoramiento del individuo y por añadidura el de la sociedad. En otras palabras, invertir en las personas para mejorar la sociedad. Junto a lo anterior, el Estado debe asegurar un compromiso y una voluntad política apoyada en medidas fiscales y en reformas de política educativa. Junto a lo anterior, la declaración de Jomtien señala, para el Estado firmante, que debe proporcionar un sólido ambiente intelectual y científico a la educación. Lo que requiere del mejoramiento de la enseñanza superior y del desarrollo de la investigación científica.

Lamentablemente, el producto de este compromiso mundial se tradujo en el sus-



Marco Bizzarri, Fuente (Óleo y acrílico sobre tela), 2024 (Exposición en Galería P. Ready hasta el 28 de agosto)

trato que permitió entregarle condiciones de posibilidad a lo que Paulo Freire había anticipado como la "educación bancaria". Es decir, el Estado chileno, queriéndolo o no, asumió entre los años noventa y el 2009, la promoción de una educación "bancaria" a la chilena, pero no por ello menos vertical, rígida, memorística y antidialógica.

En la periferia y la marginalidad intelectual quedaron los discursos por una educación problematizadora, dialógica y horizontal, que vincula la práctica con la teoría, que desarrolla el pensamiento crítico como pensamiento propio, la ecología de saberes y la vocación de humanización.

En el folclor quedó la noción de una educación liberadora construida en las capacidades de los actores educativos considerados como sujetos protagonistas de la transformación social de la historia. El Estado se concentró en reducir todo a la gestión educativa y a la calidad de la educación, reduciéndola casi de manera patológica a la definición de "escuelas efectivas".

El Estado también se dedicó sistemáticamente a erradicar una formación integral de múltiples dimensiones para que los procesos pedagógicos puedan desarrollar todas las capacidades humanas del estudiantado y su profesorado. Supeditado a la noción de gestión para la calidad, el Estado chileno, promovió un conjunto de medidas que conllevaban procesos educativos autoritarios, impositivos o doctrinarios. Pero al mismo tiempo, promovía un conjunto de acciones, para generar procesos de participación que más que democráticos, se implementaban

como consultas para legitimar decisiones prediseñadas.

Mirando el devenir de la relación del Estado con la Educación, se advierte que se ha evitado la promoción de la convivencia realmente humana, desarrollada en las capacidades humanas transformadoras que permitan que los actores educativos sean sujetos de la historia y no objetos de una historia determinada por fuerzas fácticas del discurso económico dominante.

Sólo la inesperada e irreverente protesta del estudiantado de la educación básica y media del año 2006, fracturó la hegemonía del Estado y cuestionó su estrategia de promoción de la educación. Fue muy a contrapelo que las autoridades y la intelectualidad de la época, reconocieron la legítima y justa queja estudiantil. Fue precisamente en este contexto que el Estado inicia la reflexión que finalmente aboca en la Ley General de Educación promulgada en agosto del año 2009. Instrumento general que sin perder el foco en la noción de "calidad" le agrega la palabra "equidad". Prueba de lo anterior es la creación de la Agencia Calidad de la Educación.

No obstante, pese al ajuste legal, las medidas que surgieron de esta nueva expresión de la política educativa del Estado chileno, no fue suficiente para contrarrestar las históricas protestas universitarias que se expresaron masivamente desde el año 2011 y que estuvieron en la génesis del estallido social de octubre de 2019. Dicho en forma simple, los actores educacionales apoyados por una importante y transversal opinión de la ciudadanía mostraban su descontento con

el modelo y los resultados de la política educativa nacional.

Situados en la crítica al actual rol del Estado queda de manifiesto que la política y la práctica educativa no consiste únicamente en cambiar las estructuras económicas de la dominación. Se trata también de incluir una lucha en torno a la expresión de las identidades, de los valores y de los modos de cómo nos identificamos y le otorgamos sentido a la vida. La concepción de educación como lucha simbólica es la que admite que el futuro nunca es neutral pero que siempre debe ubicarse del lado de la justicia. En momentos de un individualismo desenfrenado, de un interés propio y de una creencia dogmática en la privatización, son los ideales en que muchas sociedades occidentales abordan la relación entre Estado y Educación, pero que terminan en caldos de cultivo para el resurgimiento de peligrosas formas de autoritarismo.

Pero, por el contrario, una institución educativa que se ponga del lado de los oprimidos y que brinde un modelo de esperanza y construcción colectiva apoyada en movimientos sociales con bases amplias, es una apuesta viable. En una época en que la educación promovida por los Estados está en jaque en casi todo el mundo, la educación para la libertad y la emancipación colectiva que se puede apreciar en las prácticas cotidianas de gran parte de los autores educativos, tiene un peso relevante para lograr una democracia sustantiva y evitar la emergencia de los rebautizados fascismos. ■

*Investigador PIIE **Académico UTEM.